

El secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, ha afirmado que la política de "enfriamiento" de la economía española está dando resultados alentadores. Ante un auditorio de inversores extranjeros, el secretario de Estado aseguró

que el crecimiento de la economía española será superior al de la CE y al de la OCDE en 1991 y en 1992, y posiblemente en años posteriores. Por su parte, el presidente de la CEOE, José María Cuevas, advirtió sobre la "preocupante

desaceleración de la inversión, que en 1990 sólo creció un 1,2% en bienes de equipo, frente al 12% registrado en 1989". lo que achacó a la política de control de la inflación y a los costes laborales y de seguridad social.

El crecimiento de la economía española seguirá siendo superior al de la CE", afirma Pedro Pérez

A José María Cuevas le preocupa, sin embargo, la desaceleración de las inversiones

COLPISA
MADRID

Pérez intervino en el II Seminario Internacional sobre el Mercado Español de Valores que organiza la Sociedad de Valores y Bolsa FG Inversiones Bursátiles. A estas reuniones asiste más de un centenar de inversores institucionales extranjeros que controlan alrededor del 80 por ciento de las compras y ventas de acciones en los Mercados Españoles de Valores.

Pérez destacó que la demanda interna había sido del 4,6 por ciento en 1990, lo que significaba una reducción de 3 puntos con respecto a 1989, "sin que ello haya perjudicado la tasa de crecimiento, que se redujo sólo en un punto". En otro momento resaltó que se estabilizaba progresivamente el desequilibrio exterior español, y que las expectativas de un buen año turístico permitían evolucionar hacia unos resultados homogéneos con los de los últimos 20 años.

Anunció el secretario de Estado de Economía que la política monetaria y la política fiscal para 1991 seguirán siendo restrictivas, para insistir en que la prioridad absoluta de la política económica sigue siendo el esfuerzo contra la inflación.

JOSE MARIA CUEVAS

Por su parte, el presidente de la CEOE, José María Cuevas, advirtió en el mismo seminario sobre la "preocupante desaceleración de la inversión, que en 1990 sólo



Pedro Pérez. (ARCHIVO).



José María Cuevas. (BOTAN).

creció un 1,2 por ciento en bienes de equipo, frente al 12 por ciento registrado en 1989".

El presidente de los empresarios españoles achacó ese descenso a una política de control de la inflación basada en la restricción monetaria, y a unos costes laborales (salariales y de Seguridad Social), de los más elevados de Europa. Como incentivo para recuperar la inversión, Cuevas propugnó una política que favorezca fiscal y financieramente la entrada de dinero exterior y que fomente el ahorro interno.

En su exposición ante el foro

de inversiones extranjeros también analizó los problemas laborales.

"El diálogo social está bloqueado —señaló José María Cuevas— por la actitud de las centrales sindicales; la negociación se limita a la pugna por los incrementos salariales". En su opinión, carece de sentido que en 1990, con una tasa de paro del 16 por ciento, "se haya provocado una de las aceleraciones salariales más elevadas de Europa".

El presidente de la CEOE reafirmó su apoyo total a la Unión Económica y Monetaria Europea,

al sistema europeo de bancos centrales y a la moneda única, lo que requiere una mayor convergencia económica real, de cuya política se beneficiaría España. Ante el inminente paso hacia la integración europea, propuso limitar el protagonismo de la política monetaria para propiciar el descenso de los tipos de interés, austeridad en el gasto público compatible con un esfuerzo en mejorar las infraestructuras y una reforma urgente del sistema tributario que fomente el ahorro y simplifique las obligaciones de los contribuyentes.

Los paros laborales en Telefónica causaron problemas al usuario en oficinas y locutorios de la compañía

COLPISA
MADRID

Los paros de cuatro horas convocados por los sindicatos en Telefónica no afectaron al usuario; pero sí se notaron en la atención directa al cliente en oficinas y locutorios públicos. No obstante, como es habitual las cifras no coinciden y mientras que los representantes de los trabajadores mantienen que el 75 por ciento de la plantilla efectiva apoyó la protesta, un portavoz empresarial bajó el porcentaje al 44 por ciento.

En Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades se realizaron concentraciones y manifestaciones paralelas a los paros, que causaron problemas e interrupciones del tráfico. Telefónica cuenta con una plantilla de 75.000 trabajadores y la protesta tiene por objeto mejorar la oferta de la compañía en el convenio colectivo que se negocia. Las conversaciones se reanudarán este jueves.

"AVERIAS" CASUALES

Un miembro del sindicato Comisiones Obreras explicó que los paros y huelgas que se convocan apenas tienen repercusión en la utilización cotidiana del teléfono, puesto que el sistema está informatizado y automatizado. "En consecuencia y casualmente —ironizó el representante sindical— días antes o, incluso, horas antes de una medida de protesta anunciada ocurrirán averías o desconexiones de las que nadie será responsable".

Las principales reivindicaciones de los sindicatos consisten en un incremento salarial del nueve por ciento, conversión de 5.000 empleos eventuales en fijos y reducción de la jornada a 35 horas semanales. La dirección de Telefónica, por su parte, ofrece una subida del cinco por ciento.

Querrela contra Eurocapital por falsedad en la compra de acciones

MADRID
COLPISA

La Fiscalía de Madrid presentó ayer en el juzgado de guardia de la capital una querrela contra los dos máximos responsables de la sociedad de valores de bolsa Eurocapital, a los que acusa de un delito de falsedad en documento mercantil cometido para obtener fraudulentamente acciones de la empresa Repsol y revenderlas después a grandes inversores.

La denuncia se dirige contra José del Alcázar Silvela, consejero y director general de Mercados de la sociedad, y Liberto Campillo Molina, director del Departamento de Renta Variable de la firma.

Esta es la tercera querrela que

la Fiscalía de Madrid presenta en los juzgados contra sociedades de valores que recurrieron a métodos ilegales para obtener grandes cantidades de acciones de Repsol, cuya adquisición había sido limitada por la propia empresa para diversificar su accionariado entre pequeños y medianos inversores. Las dos demandas anteriores acusaron del mismo delito a las firmas Drexell y Usera y Morenés, aunque cada una utilizó un "modus operandi" distinto.

Según el texto de la querrela, en este caso Del Alcázar y Campillo "elaboraron una lista de 227 suscriptores en la que hacían constar nombres, apellidos y documentos de identidad de personas físicas que no se correspondían a la realidad".

El Partido Popular propone un sistema fiscal que promueva el ahorro y rebaje impuestos

COLPISA
MADRID

Una nueva fiscalidad que promueva el ahorro y la eficiencia económica, la reforma de la financiación de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de Empleo, la desregulación de sectores productivos y la reestructuración del gasto público son algunas de las principales medidas que el Partido Popular propone como base para lograr la competitividad de la economía española en el mercado único de 1993.

España necesita —considera el PP— un nuevo sistema fiscal que promueva el ahorro y la eficiencia económica. Propone, en concreto, una reducción de impus-

tos directos, la supresión de la discriminación de las rentas del trabajo, una rebaja en las retenciones del IRPF, la regularización inmediata de los balances empresariales y la elaboración de nuevas tablas de amortización para las empresas.

La reforma de la financiación de la Seguridad Social —sugiere el PP— debe inclinarse por la racionalización de las prestaciones y la gradual reducción hasta alcanzar 8 puntos de las aportaciones de trabajadores y empresarios durante los próximos dos años.

Los conservadores consideran necesario reestructurar el gasto para ofrecer a la sociedad española servicios de calidad mediante la mejora de la gestión, la concu-

rrencia de la iniciativa privada y la valoración rigurosa de la relación coste-beneficio de los programas de inversión pública.

La desregulación de sectores productivos es una de las piezas básicas del plan de competitividad de los "populares". Entre las actuaciones concretas en este ámbito destacan el fomento de la competencia en los transportes, la reducción progresiva del monopolio estatal en el servicio de Correos, la privatización de Caja Postal y la elaboración de una ley de bases de la empresa pública.

También plantea el PP la reforma del INEM, mediante el traspaso al sector privado de las competencias en materia de colocaciones.